

Cuenta regresiva en San Antonio

La Moneda busca un plan ante desalojo obligado de la megatoma que alberga a 10 mil personas

● El gobierno hoy no está en condiciones de ofrecer una alternativa de vivienda a las personas que deben abandonar los terrenos tomados y busca con desesperación ganar tiempo para evitar la escena de carabineros desalojando familias. Por lo demás, tampoco cuenta con el personal de Carabineros suficiente para concretar la orden de la justicia.

Hasta ahora las negociaciones por la megatoma de San Antonio se habían llevado a cabo fuera de La Moneda. Sin embargo, la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que dio un ultimátum al gobierno para ejecutar el desalojo el jueves 27 de febrero a las 10:00 a.m., obligó al gobierno a activar el botón de emergencia.

Así, esta mañana llegaron hasta La Moneda el ministro Vivienda, Carlos Montes (PS); la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallego (FA), y un representante de Carabineros para reunirse con el subsecretario del Interior Luis Cordero, el jefe político directo del delegado presidencial de San Antonio, quien junto al alcalde debe ejecutar la orden de la justicia de sacar de los terrenos tomados a las 10 mil personas que viven ilegalmente allí.

El hecho concreto es que el gobierno hoy no está en condiciones de ofrecer una alternativa de vivienda a esas personas y busca con desesperación ganar tiempo para evitar la escena de carabineros desalojando familias. Por lo demás, tampoco cuenta con el personal de Carabineros suficiente para concretar la orden de la justicia.

De hecho, esta mañana el alcalde de San Antonio, Omar Vera, fue enfático: “Lo complejo son las personas, porque

no tenemos ninguna posibilidad de acogerlos”

Frente a este escenario, la cita de hoy en el Palacio de Gobierno fue para evaluar alternativas, apostando a que aún hay tiempo para llegar a un acuerdo con los tres dueños de los terrenos. La apuesta de Montes es que accedan a un entendimiento con los pobladores que, organizados a través de cooperativas, compren los terrenos. Hasta el momento hay 3.200 personas de la toma inscritas en esta orgánica con miras a adquirir el terreno.

El fallo del tribunal, emitido el lunes por la tarde, ordenó que el desalojo se realice “en etapas, de forma razonable y paulatina”. Frente a ello esta mañana se abordó la necesidad de que la Municipalidad de San Antonio, la Delegación Presidencial Regional y Carabineros diseñen una “división cuadrícula” para llevar a cabo el desalojo.

Montes en entrevista con La Tercera ya adelantaba la preocupación del gobierno, indicando que en caso de efectuarse el desalojo por medio de la institución policial y la posibilidad de que la historia termine con la imagen de la fuerza pública entrando a la megatoma del cerro Centinela en San Antonio y desalojando a los pobladores, con niños y ancianos, “generaría una situación insostenible desde el punto de vista humanitario”.



La toma más grande Chile, de 260 hectáreas, se ubica en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso.

Minvu enviará tasación a la corte de Apelaciones

En la reunión se definió que el Ministerio de Vivienda entregará la información levantada en el terreno a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con miras a solicitar más tiempo para encontrar una solución.

“Tenemos cinco informes que hemos elaborado sobre distintos aspectos: catastro, terreno, tasación, vuelos de

drones, distintos elementos para poder avanzar en buscar una solución, buscar una alternativa con calma y que realmente responda a la necesidad de las distintas partes”, aseguró el ministro.

Uno de estos informes es un catastro realizado por la cartera liderada por Montes, que cifra en cerca de 10 mil personas las que viven en este macrocampamento, donde un 33% son niñas, niños y

adolescentes; más del 70% de las familias se encuentra en situación de alta vulnerabilidad social; un 13% son extranjeros y más del 90% no posee segunda vivienda ni ha recibido subsidio habitacional anteriormente.

Mientras tanto, la autoridad de gobierno ya se ha reunido con los tres propietarios del terreno y, en la reunión, comprometió seguir con la negociación.

En un punto de prensa desde La Moneda, el secretario de Estado insistió en que el lunes sostendrán una reunión con los dueños —la Inmobiliaria San Antonio—, “cuyo propósito fundamental es seguir conversando, porque creemos que este es un problema nacional muy serio”. Ese día, según Montes, se debería alcanzar un acuerdo.